

Santiago, cuatro de noviembre de dos mil veintidós.

**Vistos y teniendo presente:**

**Primero:** Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso séptimo del artículo 483-A del Código del Trabajo, se ordenó dar cuenta de la admisibilidad del recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandada en contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que acogió el de nulidad que interpuso la demandante contra la que, en lo pertinente, no hizo lugar a la acción de tutela y la subsidiaria de despido injustificado, dictando sentencia de reemplazo que acogió la demanda de despido injustificado, condenándola a pagar la indemnización sustitutiva de falta de aviso previo y la indemnización por años de servicios más el recargo legal.

**Segundo:** Que el recurso de unificación de jurisprudencia es susceptible de ser deducido contra la resolución que falle el de nulidad, estableciéndose su procedencia para el caso en que *“respecto de la materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de Justicia”*, conforme lo explicita el artículo 483 del Código del Trabajo.

Asimismo, según lo dispuesto en su artículo 483-A, esta Corte debe controlar como requisitos para su admisibilidad, por un lado, su oportunidad; en segundo lugar, la existencia de fundamento, además de contener una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto de las materias de derecho objeto de la sentencia, sostenidas en diversos fallos emanados de los tribunales superiores de justicia, y finalmente, debe acompañarse copia del o los fallos firmes o ejecutoriados que se invocan como fundamento del recurso en referencia.

**Tercero:** Que la materia cuya unificación se pretende radica en *«determinar si procede desconocer la existencia de un nombramiento a contrata, regido por el Estatuto Administrativo, y en su lugar declarar la existencia de una relación laboral, que se encuentra regida por el Código del Trabajo, para así condenar al Fisco de Chile al pago de las indemnizaciones laborales establecidas en este último cuerpo legal con motivo del término de ese nombramiento a contrata, cuyo marco jurídico es incompatible con las indemnizaciones del Código del Trabajo.»*.

**Cuarto:** Que la sentencia impugnada, a propósito del recurso de nulidad de la demandante, basado en las causales de los artículos 478 letras e) y b) y 477 del Código del Trabajo, las dos últimas en carácter de subsidiarias, lo acogió, estimando que *«...el demandante prestó servicios en el Hospital Militar (auxiliar de servicio)*



*desde el 16 de febrero del 2004 hasta el 31 de diciembre de 2019 (motivo 3° del fallo en alzada); por resolución DPR II/1 (R) N°437 de 12 de agosto de 2009 se dispuso la contratación del actor hasta el 31 de diciembre de 2009, como personal a contrata (motivo 4°); por resolución DRRHH DPE (R) N°1000/36642, de fecha 13 de noviembre de 2019, se dispuso la no renovación de la contrata del demandante, por lo que ésta termina a partir del 31 de diciembre de 2019, fecha hasta la cual su relación con la denunciada se mantuvo (motivo 9°).*

*De la lectura del considerando antes citado se verifica que la sentenciadora no ponderó toda la prueba rendida, sino que solo se refirió a ciertos documentos que le sirvieron para adoptar su decisión, sin valorar la documental que el actor echa en falta, lo cual configura el vicio de omisión de los requisitos que toda sentencia laboral debe tener, ya que esa prueba silenciada correspondía a un contrato de trabajo y su anexo, de manera que su examen podía alterar la conclusión alcanzada en el fallo, en la medida que se trataba de documentación que daba cuenta de la existencia de una relación de naturaleza laboral que vinculó a las partes y que como tal estuvo regida por el Código del Trabajo. Lo anterior no es baladí desde que, al no valorar todos los medios de prueba ha incurrido en un vicio que es manifiesto, es decir, evidente*

*Tales documentos dan cuenta que la relación laboral que nació entre las partes el 14 de febrero de 2004, se mantuvo inalterable hasta el 12 de agosto de 2009, oportunidad en que se dictó la Resolución DPR II/1 (R) N°437 de 12 de agosto de 2009 que dispuso la contratación del demandante hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, indicándose que a contar del 01 de junio de 2009 se contrata al actor como personal “a contrata”, para que se desempeñara en el mismo lugar físico y cumpliera las mismas funciones que ya venía desarrollando en virtud de contrato de trabajo*

*En efecto, en este caso lisa y llanamente se cambió la situación contractual del actor de forma unilateral, pasando a estar regido por normas estatutarias, sin considerar lo dispuesto en el artículo 5° inciso 2° del Código del Trabajo que reconoce la irrenunciabilidad de los derechos establecidos por las leyes laborales mientras subsista el contrato de trabajo y con ello la indisponibilidad del vínculo que naciera entre las partes. Por ende, la verdad documental contenida en la Resolución DPR II/1 (R) N°437 debe ceder ante la verdad fáctica, esto es, lo que demuestra la realidad de los hechos y sucede que, en este caso, los documentos señalados en las letras a) y b) del motivo anterior, permiten acreditar que el actor fue contratado*



*mediante la suscripción de un contrato de trabajo regido por el Código Laboral y que se mantuvo desarrollando las mismas labores y en las mismas condiciones esenciales que ejecutara desde un inicio, realidad que no se vio alterada por una formalidad documental, menos todavía si se considera que ello trajo consigo la precarización de la persona que prestó sus servicios personales por más de una década».*

En la sentencia de reemplazo se determinó que *«...habiéndose acreditado que la existencia de una relación laboral entre las partes, desde el 16 de febrero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2019, la que terminó mediante la desvinculación del actor a través de una Resolución que le informó la no renovación de su contrata y reducción del personal, sin que se haya invocado causal legal contenida en el Código Laboral, se concluye necesariamente que el término de la relación laboral es injustificada.*

*(...) Que sobre la base de lo señalado corresponde acoger la demanda subsidiaria por despido injustificado y pagar las sumas adeudadas que se señalarán en lo resolutivo, teniendo como base para el cálculo la remuneración de los tres últimos meses trabajados, que asciende a la suma de \$746.129, que no ha sido controvertida».*

**Quinto:** Que, para efectos de contraste, el recurrente acompaña las sentencias dictadas por esta Corte, en los autos roles N°33.226-2020 y 67.401-2016.

En ambas, se determinó que la relación a contrata de los demandantes, impedían considerar como aplicable la normativa del Código del Trabajo a su respecto, así, en la primera de ellas se dijo que: *«...obiter dictum y tal como antes se precisó, las argumentaciones de este fallo se han limitado a resolver la materia de derecho propuesta, sin perjuicio de lo cual, se debe recordar que esta Corte ya se ha pronunciado sobre la imposibilidad de aplicar, en lo demás, las normas del Código del Trabajo a los funcionarios a contrata, para lo cual se debe tener en consideración lo dispuesto en su artículo 1 que, prima facie, excluye de la aplicación de los derechos que contiene a los funcionarios públicos, por estar sujetos a un régimen específico, con su propio catálogo de derechos y obligaciones, que los hace incompatibles con aquellos contenidos en el referido código, conclusión coherente con lo dispuesto en la Ley de Bases de la Administración del Estado, que establece que su personal se regirá "por las normas estatutarias que establezca la ley", y en cumplimiento de tal mandato, la Ley N°18.834 define las diversas categorías de vinculación, precisando que pueden ser de planta o a contrata, caracterizándose*



*éstos por su transitoriedad, puesto que durarán, como máximo, hasta el 31 de diciembre de cada año, por lo que cesarán en sus funciones los empleados que las sirvan en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido dispuesta la prórroga con treinta días de anticipación, a lo menos, concluyéndose, de lo anterior, que el régimen aplicable es el estatutario, vínculo de derecho público, cuyo origen directo es la ley, y no una convención celebrada entre las partes, sino que por vía de la imposición legal unilateral, se establecen los derechos, obligaciones y deberes funcionarios.*

*De este modo, de acuerdo con la doctrina sostenida por esta Corte en la materia, tal como se decidió en los autos Rol N°67.401 16 y 33.543 2018, "el vínculo que se genera con la incorporación a algún cargo de la Administración Pública u órgano del Estado, por vía de la contrata regida por un estatuto especial, no genera vínculo laboral regido por el Código del Trabajo, de manera que los derechos que contempla no son susceptibles de ser reclamados por los funcionarios públicos", por lo que afirmar que su desvinculación constituye un despido injustificado y la pretensión de pago de las indemnizaciones laborales que el Código del ramo hace consecuentes a tal declaración, configuran un error, puesto que no pueden ser reclamadas por quienes están bajo un régimen estatutario especial, como sucede en la especie, desde que el cuerpo legal específico que regula su vínculo establece sus propios derechos, acciones y obligaciones, excepto por el procedimiento de tutela de derechos fundamentales que esta Corte ha sostenido, reiteradamente, le es aplicable a los funcionarios públicos, por tratarse de una materia susceptible de ser comprendida al amparo del inciso tercero del artículo 1 del Código del Trabajo y, ahora, por la Ley N°21.280.*

*Finalmente, en relación con lo expuesto, también se ha decidido por esta Corte la improcedencia de imponer a los servicios regulados por normas estatutarias las indemnizaciones a que se refieren los artículos 162, 163 y 168 del Código del Trabajo, en el caso de ejercerse por un funcionario a contrata la acción de tutela por vulneración de derechos fundamentales, cuya reglamentación se encuentra en la Ley N°18.834, puesto que la posibilidad para proceder en los términos previstos en los artículos 485 y siguientes del citado código, por carecer la Ley N°18.834 de un procedimiento de amparo en caso de afectación de los derechos que se protegen en el referido procedimiento, tal como se explicó, sólo permite, para estos casos, la condena a la indemnización tarifada, siempre que concurran los presupuestos*



*necesarios para declararla procedente, tal como se decidió en los autos Rol N°1.799 2017, 456 2018 y 13.852 2019.”».*

*En el segundo fallo citado se determinó que «...de esta manera, el demandante pertenece a una categoría de trabajadores empleado público, sujeto a una especial relación con su "empleador", paralela al régimen ordinario del Código del Trabajo, denominada por la doctrina como "estatutaria", puesto que el vínculo que lo liga con el Estado se corresponde con uno de derecho público, cuyo origen directo es la ley, y no una convención celebrado entre el Estado y los funcionarios en cuanto partes, sino que por vía de la imposición legal unilateral, se establecen sus derechos, obligaciones y deberes.*

*Por otro lado, la función realizada por aquellos está presidida por los fines propios del Estado, en especial el bien común, por lo que el contenido del estatuto pertinente tiende a regular la vinculación funcionaria haciendo predominar el interés general por sobre el interés particular.*

*(...) Que, de este modo, esta Corte coincide con la doctrina expuesta en la sentencia de contraste acompañada por el recurrente, correspondiente a los autos Rol N°87-2015 de la Corte de Apelaciones de La Serena, en el sentido de que el vínculo que se genera con la incorporación a algún cargo de la administración pública u órgano del Estado, por vía de la "contrata" regida por un estatuto especial, no genera vínculo laboral regido por el Código del Trabajo, de manera que los derechos que contempla no son susceptibles de ser reclamados por los funcionarios públicos.*

*En efecto, la imputación de no justificación de un despido y las indemnizaciones laborales que el código laboral hace consecuente a tal declaración, no pueden ser reclamadas por quienes están bajo régimen estatutario especial, como sucede en la especie, desde que el cuerpo legal específico que regula su vínculo establece sus propios derechos, acciones y obligaciones, de modo que el Código del Trabajo sólo les será aplicable en el caso contemplado en el inciso tercero de su artículo primero, cuyo no es el caso.*

*(...) Que, por todo lo analizado, se concluye que el demandante se desempeñó para el Ejército de Chile al amparo del DFL 1, cuyo artículo 3 b) le resulta aplicable en derecho, lo que hace procedente acoger el presente arbitrio en tal sentido, dictando sentencia de unificación de jurisprudencia.*

*Consideraciones sobre la base de las cuales se acoge el requerimiento de unificación de jurisprudencia incoado por el demandado con motivo de la sentencia*



*pronunciada el veinticinco de agosto de dos mil dieciséis por la Corte de Apelaciones de Chillán, la que es nula, debiendo dictarse inmediatamente a continuación y sin nueva vista, la de reemplazo».*

**Sexto:** Que, como se advierte, la materia de derecho propuesta en el recurso de unificación, en relación con los hechos establecidos y el razonamiento entregado por la judicatura del fondo, se distancia de lo resuelto en los fallos de contraste, puesto que éstos versan sobre trabajadores que desempeñaban sus funciones simplemente bajo la fórmula “a contrata” sin que de forma previa las hayan desarrollado en virtud de un contrato de trabajo, circunstancia que fue determinante en la presente causa para arribar a la conclusión de la existencia de una relación laboral.

Así, al no concurrir identidad o similitud de antecedentes fácticos ni jurídicos, resulta imposible efectuar el cotejo que se requiere para la procedencia de este arbitrio excepcional y de derecho estricto, de lo que fluye su desestimación en esta etapa procesal.

**Séptimo:** Que, en estas condiciones, sólo cabe declarar la inadmisibilidad del recurso deducido, teniendo particularmente en cuenta para así resolverlo, el carácter especialísimo y excepcional que le ha sido conferido por los artículos 483 y 483-A del Estatuto Laboral.

Por estas consideraciones y normas citadas, **se declara inadmisibile** el recurso de unificación de jurisprudencia presentado por la parte demandada en contra de la sentencia de seis de julio de dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Regístrese y devuélvase.

Rol N°53.967-2022.

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema por los Ministros señor Ricardo Blanco H., señora Andrea Muñoz G., señor Diego Simpertigue L. y las abogadas integrantes señor Pia Tavorlari G., Pedro Águila Y. No firma la Ministra señora Muñoz y el abogado integrante señor Águila, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar con licencia médica la primera y por estar ausente el segundo. Santiago, cuatro de noviembre de dos mil veintidós.





En Santiago, a cuatro de noviembre de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

